

Revista chilena de historia social popular

REVUELTAS

SANTIAGO, CHILE | NÚCLEO DE HISTORIA SOCIAL POPULAR
AÑO 05 | NÚMERO 09 | JULIO 2024 | ISSN 2452-5707

ARTÍCULOS

“La unión en la lucha es la única alternativa que tenemos los humildes y explotados...” Movimiento social urbano e insurgencia obrera en el norte de México, 1970-1976

The unity in struggle is the only alternative we, the humble and exploited, have...” Urban social movement and workers' insurgency in Northern Mexico, 1970-1976

José Javier Soto Gómez

Profesor de Asignatura Escuela
Nacional de Antropología e Historia
Doctorando en Historia, Colegio de México
Ciudad de México, México

✉ javiesoto1697@gmail.com

id [0000-0003-0218-7254](https://orcid.org/0000-0003-0218-7254)

Recibido: 29 de junio 2023

Aceptado: 03 de diciembre 2023

Cynthia Alejandra Ramírez Palomino

Profesora de Asignatura Escuela
Nacional de Antropología e Historia
Maestrando en Antropología Social, CIESAS
Ciudad de México, México

✉ cindy.rococo@gmail.com

id [0009-0009-4743-271X](https://orcid.org/0009-0009-4743-271X)

Resumen: La década del setenta en México fue un periodo de intensa agitación popular protagonizada por sectores urbanos, obreros y campesinos. Este artículo tiene por objetivo analizar, desde la historia social, la relación que se estableció entre el *Movimiento social urbano* y la *Insurgencia obrera-sindical* en el norte de México durante esos años. El problema central consiste en explicar históricamente la articulación entre las *colonias independientes* y el movimiento obrero en la región norteña de México conocida como Comarca Lagunera entre 1970 y 1976. Para este trabajo, se utilizaron documentos de archivo, periódicos regionales y testimonios orales.

Palabras clave: Movimiento social urbano; insurgencia obrera; izquierda mexicana; historia social; conflicto social

Abstract: The decade of the seventies in Mexico was a period of intense popular agitation carried out by urban sectors, workers, and peasants. Framed in Social History the principal purpose of this article is to analyze the relationship established between the *Social urban movement* and *Union-Worker Insurgence* in Northern Mexico during those years. The central problem is to make a historical explanation of the articulation between the *colonias independientes* and the labour movement in the Northern Mexican region known as the Comarca Lagunera between 1970 and 1976. This work used archive documents, local journals, and oral testimonies.

Keywords: Social urban movement; worker insurgence; Mexican left; social history; social conflict

Introducción

Entre la década del sesenta e inicios de los años ochenta, ciertos sectores populares de la ciudad y de la clase trabajadora mexicana, tanto de empresas privadas y públicas, se organizaron y protestaron sin el dominio de las centrales de masas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que fue el instrumento del Estado para controlar a los sectores campesinos, obreros y populares, desde su fundación en 1946. Por un lado, a las expresiones de protesta y organizativas de los sectores populares de la ciudad que tienen por objetivo el mejoramiento de sus condiciones materiales de vida han sido conceptualizadas como *Movimientos sociales urbanos*. Por lo general, estas movilizaciones buscaron reivindicaciones en torno al consumo colectivo al exigir el acceso al suelo urbano, la regularización de los asentamientos, al equipamiento y a los servicios básicos (Pradilla, 2019; Borja, 1975; Castells, 1977). Mientras que, *Insurgencia obrera-sindical*, es el término que hace referencia a las movilizaciones encabezadas por la clase trabajadora, que se extendieron de finales de los años sesenta hasta principios de los ochenta en México, impulsadas por obtener mejoras salariales y de las condiciones laborales, participar en la organización del proceso productivo, independizarse de las estructuras corporativas del partido oficial y, sobre todo, lograr la democracia al interior de los sindicatos (Escobar, 2021; Ortega y Solís, 2005; Necochea y Pensado, 2015).

El nuevo ciclo de movilizaciones populares en México estuvo enmarcado por el agotamiento del modelo de acumulación capitalista nacional basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) implementado a partir de la Segunda Guerra Mundial (Calva, 2019; Ayala, 2008; Bazdresch y Levy, 1992). A lo largo del país, las organizaciones obreras y urbanas desplegaron estrategias de acuerdo con su posición social referente a los medios de producción. Por lo tanto, las formas de lucha de los trabajadores incluyeron huelgas, paros, tortuguismo, actos de sabotaje al interior de la manufactura, manifestaciones y tomas de edificios sindicales. Las organizaciones urbanas, por su parte, realizaban mítines y tomas de las oficinas gubernamentales encargadas de los servicios urbanos y la regularización de los asentamientos, así como marchas por las calles de la ciudad (Ramírez, 1985; Ortiz y Morales, 1991).

El cúmulo de trabajos en torno a los movimientos sociales urbanos y la insurgencia obrera en México tomaron rutas separadas hasta tiempos recientes. Las investigaciones sobre los *movimientos urbanos populares*, término establecido por las propias organizaciones urbanas nacionales y adoptado por los académicos, discutieron si sobrepasaron las estructuras estatales y se organizaron independientemente del PRI. Los debates también cuestionaron si estos movi-

mientos consiguieron continuar tras obtener sus demandas, articular reivindicaciones más allá de sus problemas inmediatos, generar organizaciones con control territorial, o bien, ser capaces de controvertir las estructuras urbanas y la correlación de fuerzas entre los grupos populares y el Estado (Navarro y Ramírez, 1985; Hellman, 1994; Ramírez, 1994). Otros investigadores señalaron su capacidad para generar una cultura que antepone lo colectivo, la democracia de base y los valores de uso al individualismo, los liderazgos autoritarios y la mercantilización de la vida (Núñez, 1990; Sevilla, 1998). Distintos estudios discutieron el papel de las agrupaciones políticas de izquierda en la formación de las organizaciones populares urbanas (Bracho, 1993; Bennett y Bracho, 1993; Barbosa 1984). Finalmente, las investigaciones sobre la participación de los movimientos urbanos en el proceso de democratización demostraron que los cambios en la *estructura de oportunidades* políticas a finales de la década de 1980 llevaron a que se vincularan con los partidos de izquierda, lo cual provocó que los líderes se centraran en la labor partidista distanciándose de las bases (Lawrence, 2006; Moreno, 2013).

En torno a la *insurgencia obrero-sindical*, se señaló que durante la década del setenta el movimiento obrero independiente tuvo diferentes tendencias. Por un lado, el sindicalismo conformado por obreros de empresas públicas y estratégicas (Ferrocarriles Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) que retomó el nacionalismo revolucionario mexicano. Por otro, el sindicalismo de la joven clase obrera de industrias modernas y dinámicas, como los sectores metalúrgico y automotriz, que buscó tener mayor participación en el proceso de trabajo (Pérez, 1990; De la Garza, 1991; Melgoza y De la Garza, 1996). Entre la abundante bibliografía, destacan los estudios sobre las tácticas, estrategias, organizaciones y el conjunto de ideas que respaldaban a los trabajadores metalúrgicos, electricistas, automotrices y del sector educativo que intentaban superar el control corporativo. (Solís, 1976; Galindo, 1977; Trejo, 1978; Tagle, 1980; Trejo, 1987; Novelo, 1989; Escobar, 2021; Necochea, 2022). Asimismo, se investigaron las condiciones políticas y económicas que propiciaron el surgimiento del *sindicalismo independiente*, destacando el momento de *apertura democrática* durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) y la modernización de los procesos productivos (González y Aspe, 1979; Roxborough y Zapata, 1983; Ortiz y Morales, 1991). De igual manera, estuvieron presentes las discusiones acerca de la identidad obrera y sus transformaciones durante la *insurgencia* (Bizberg, 1990; Esterbauer, 2013). Destacan, también, los estudios sobre los intentos de resistencia obrera a la instauración del neoliberalismo de principios de los años ochenta, así como las estrategias represivas y de relocalización industrial implementadas por el Estado y la dirección empresarial (Middlebrook, 1989; De la Garza, 1993; Trejo 2004; Mendoza, 2015). Finalmente, ha sido estudiada la etapa de la reestructuración productiva neoliberal y su impacto en las condiciones laborales de los trabajadores una vez

concluida la insurgencia sindical (Méndez y Quiroz, 1994; Zapata, 1998; Bensusán y Carrillo, 2012).

Uno de los debates centrales sobre los *movimientos sociales urbanos* es el vínculo que guardan las luchas urbanas con el conjunto de las contradicciones de la sociedad capitalista; es decir, el papel que asumen frente a los conflictos políticos entre las clases sociales. En torno a esta cuestión, ha interesado dilucidar las posibilidades y características de la relación y el entrelazamiento que establecen con la lucha de los trabajadores. Manuel Castells (1977, p. 105) advirtió que el vínculo entre la lucha urbana y política depende “de las características de la organización política dominante” en el territorio donde se ubican los grupos populares. De acuerdo con Emilio Pradilla (1987, p. 249) para que estas movilizaciones se conecten con la “política revolucionaria” de los trabajadores es “necesaria la presencia de los agentes conscientes, de los militantes de las organizaciones revolucionarias.” En su perspectiva, Jordi Borja (1974) plantea que los “movimientos urbanos de las clases populares” poseen objetivos y alcances heterogéneos. Están los que son de carácter espontáneo que se agotan una vez logrados sus objetivos. Hasta aquellos que consiguen coordinarse con otras fuerzas políticas populares y constituir una estructura orgánica con capacidad de disputar el poder político. David Harvey (2013) señala que los movimientos sociales urbanos han sido subordinados a la lucha del obrero fabril. Frente a esa posición, argumenta que la participación de los movimientos urbanos ha sido central en la lucha de clases, lo cual lo lleva a sugerir replantear la historia del movimiento de la clase trabajadora con el objetivo de mostrar la centralidad de las luchas urbanas.

Por su parte, en México, las investigaciones que estudiaron los entrelazamientos entre movimientos urbanos y obreros han sido realizadas por los historiadores Gerardo Necochea y Alicia de los Ríos, quienes al analizar las movilizaciones de colonos urbanos y trabajadores en el estado de Chihuahua durante los años setenta, contribuyeron al conocimiento de la relación que mantuvieron entre ellos y con los conflictos sociales y las fuerzas políticas locales. En esos trabajos demuestran que el Comité de Defensa Popular Francisco Villa y los mineros de la ciudad de Santa Bárbara consiguieron mantener la protesta y organización gracias a la articulación que establecieron con estudiantes, trabajadores, pequeños comerciantes y militantes de izquierda (Necochea, 2019; Necochea y de los Ríos, 2021). De las investigaciones anteriores se deriva que para profundizar en el conocimiento de la movilización urbana y obrera es importante considerar el momento de ascenso de la conflictividad social en el que se inscribieron; lo que significa reconstruir las relaciones que establecieron entre ellos, así como con las diferentes organizaciones políticas y fuerzas populares que participaron en los conflictos sociales en México entre 1960 y 1980. En ese sentido, el presente

artículo analiza históricamente la relación entre el *movimiento social urbano* y la *insurgencia obrera* en el norte de México, específicamente la relación que establecieron las *colonias independientes* con el Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), los trabajadores del Departamento de Limpieza de Torreón y con los peones de la hacienda Batopilas en la Comarca Lagunera entre 1970 y 1976.

Por lo tanto, el artículo propone explicar cómo ocurrió la relación entre el movimiento urbano y de la clase obrera en la región lagunera, así como establecer de qué manera evolucionó dicha articulación, y con ello, abonar a la discusión sobre el carácter de la relación y el entrelazamiento entre movimientos urbanos y obreros, a partir de un trabajo empírico. Esta investigación considera que los *movimientos sociales urbanos* se constituyen a partir de una base territorial que comparten sus integrantes y es una expresión de la lucha de los trabajadores que, al pugnar por el mejoramiento material de la vida en la ciudad, por lo general, realizan reivindicaciones “asociadas a la reproducción social” (Harvey, 2013, p. 190). En ese sentido estudiar su entrelazamiento con la *insurgencia sindical*, entendida como el conjunto de movilizaciones realizadas por los trabajadores asalariados por mejoras laborales, participación en el proceso productivo y democracia sindical (Melgoza y De la Garza, 1996; Necochea, 2022), contribuye a comprender la historia de la movilización de los trabajadores mexicanos durante los años setenta integrando a los distintos sectores involucrados en los conflictos sociales, así como la dinámica de su articulación. El trabajo recurre a los aportes teóricos y metodológicos de la historia social, específicamente aquellos pertenecientes a la tradición marxista. En la cual se considera que la clase trabajadora y los sectores populares son artífices de la historia, pero a su vez están determinados por relaciones de producción y políticas, así como por intereses, necesidades, alianzas y antagonismos (Kaye, 1989; Sharpe, 1996). Además, pueden incidir en los conflictos sociales que estructuran al conjunto de la sociedad, mediante su protesta y procesos de rebelión; acciones que más allá de la aparente espontaneidad están respaldadas por un ideario y durante las cuales conforman sus instituciones y métodos organizativos (Rudé, 1981; Thompson, 1995; Iñigo, 2008). Por lo tanto, para reconstruir la articulación entre el *movimiento social urbano* y la *insurgencia obrera*, se observarán los conflictos sociales que surgieron durante la etapa posrevolucionaria, la estructuración del dominio corporativista y el desbordamiento de dicho control debido al ascenso de la movilización obrera. Después, se reconstruirá el inicio del movimiento urbano destacando la participación y el papel que tuvieron los trabajadores. Finalmente, se estudia de qué manera las *colonias independientes* incidieron en la insurgencia obrera. A lo largo del trabajo se mostrará cómo la participación de sacerdotes católicos, afines a la

teología de la liberación, así como de militantes de izquierda jugaron un papel determinante para la relación de ambos movimientos.

Desarrollo capitalista, dominio corporativo y ascenso de la insurgencia sindical-nacionalista revolucionaria en la Laguna

La Comarca Lagunera es una región ubicada en el desértico norte central de México, que se compone de 15 municipios del estado de Coahuila y Durango (Figura 1), su zona metropolitana está conformada por los municipios de Torreón, Coahuila, así como por Lerdo y Gómez Palacio, Durango (Porfirio 1975, p. 11; Cerutti y Rivas 2008, pp. 170-171). Desde mediados del siglo XIX, basó su economía en la explotación algodonera mediante las haciendas. Lo cual estimuló la instalación de manufacturas dedicadas a su transformación en el poniente de Torreón al comenzar el siglo XX. El desarrollo de la economía y la red ferroviaria que integraba a la región con el mercado nacional y norteamericano propició que se convirtiera en un centro de atracción para capitales y fuerza de trabajo que buscaban emplearse en fábricas y haciendas (Rivas, 2013, p. 75; Ramos 2019, p. 21; Parker 2010, p. 330). Bajo estas condiciones, se expandió la clase trabajadora rural y urbana conformada por obreros manufactureros, peones y temporeros que arribaban a la región cada que aumentaba la demanda de fuerza de trabajo. (Vargas-Lobsinger, 1999, p. 123; Carr, 1996, pp. 93-116).

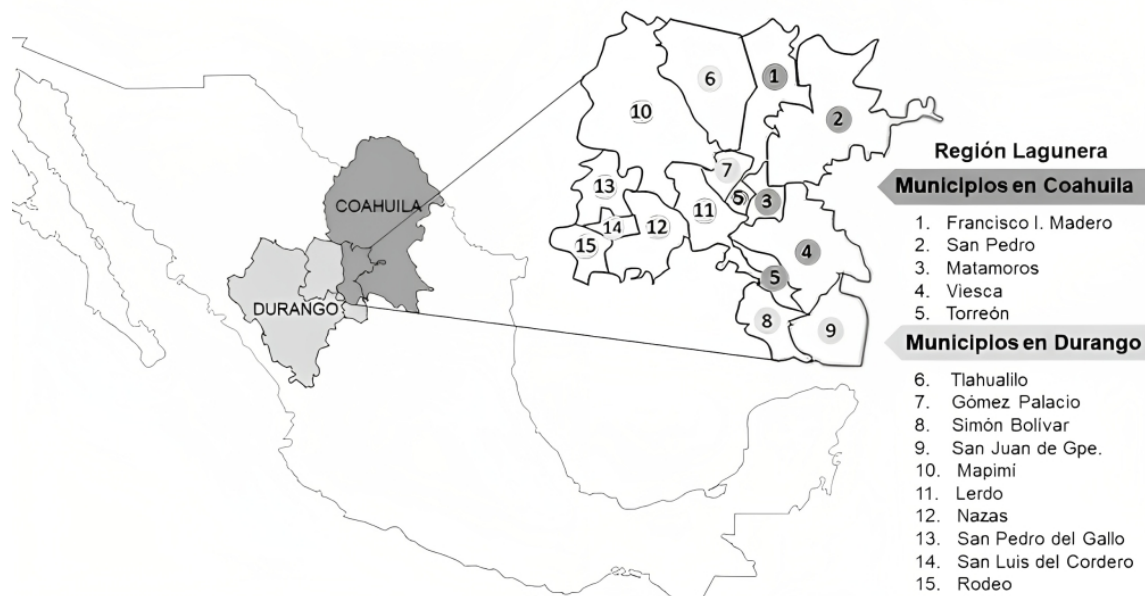


Figura N. 1 La Comarca Lagunera y sus municipios.
Fuente: Elaboración propia con base en (Sánchez, 2010, p. 28)

El proceso revolucionario que vivió México a partir de 1910 no transformó la propiedad de la tierra en la Laguna (Vargas-Lobsinger, 1999, 51-53). Asimismo, las reivindicaciones populares se extendieron durante la década del veinte y la primera mitad del treinta. En este periodo ocurrieron manifestaciones, huelgas y tomas de tierras, encabezadas por trabajadores y campesinos sin tierras. Estos grupos fueron sindicalizándose y algunos de sus integrantes se vincularon con el Partido Comunista de México (PCM). Con el objetivo de frenar la movilización, los propietarios aliados con las autoridades locales encarcelaron a manifestantes, destruyeron poblados que solicitaban tierras, persiguieron agitadores, desplazaron de manera forzada a los trabajadores más combativos e incluso asesinaron a militantes comunistas.

A pesar de la represión, el movimiento articuló una alianza obrera y campesina, que tuvo su cúspide en el ciclo de huelgas en haciendas y fábricas entre 1935 y 1936. La alianza era favorecida por la labor política del PCM. Durante este periodo, las reivindicaciones fueron de carácter sindical, agraristas y urbanas, al entrelazarse las exigencias por contratos, mejoras salariales, acceso a servicios médicos, desaparición de los sindicatos blancos, recontractación de los despedidos, expropiación del suelo urbano en el que habitaban los trabajadores, así como la división de las haciendas y la distribución de la tierra entre los peones.

El primer semestre de 1936 estuvo marcado por la expansión de las huelgas en manufacturas y haciendas, así como por la negociación entre el movimiento y los propietarios, quienes intentaban frenar las huelgas contratando a esquiroleros. Finalmente, tras varios emplazamientos, 20,000 trabajadores estallaron la huelga general en agosto. Ante ello, el presidente Lázaro Cárdenas del Río planteó al comité que levantara la huelga y a cambio realizaría la división de las haciendas y dotaría de tierra a 15,000 trabajadores laguneros. Tras este anuncio, los trabajadores decidieron concluir la huelga el 31 de agosto. Y el 6 de octubre de ese mismo año el mandatario decretó la expropiación de las haciendas (Carr, 1989, pp. 142-145; Aboites, 2013, pp. 161-162).

Esta situación provocó transformaciones económicas y políticas. En cuanto a las primeras, implicó que la explotación algodонера se diera mediante el ejido colectivo y las pequeñas propiedades. Por otro lado, la nueva condición económica llevó a la desarticulación de la alianza obrero-campesina. En primer lugar, porque el PCM centró su atención en la organización de los ejidos en perjuicio de la labor en las fábricas. En segundo lugar, porque su condición de ejidatarios llevó a que se enfrentaran a nuevas problemáticas, como acceder y mantener el crédito del Banco Ejidal. Finalmente, el tercer elemento, fue que las estructuras corporativas del Estado posrevolucionario consiguieron cooptar a las organiza-

ciones obreras, campesinas y urbanas, mediando sus reivindicaciones y controlando a la disidencia (Martínez, 1980; García, 1988).

En las décadas posteriores al sexenio cardenista, entre 1940 y 1970, la Laguna experimentó un proceso de reconcentración de la tierra propiciado por el Estado que favoreció la participación de la iniciativa privada en la producción del algodón y después en la industria lechera en detrimento de la organización ejidal; asimismo, representó la reorientación de la economía urbana y rural para responder a los designios de la nueva rama agroindustrial caracterizada por la construcción de la Gran Cuenca Lechera (Cerutti y Rivas, 2008; García, 1988; Ramos, 2019). De igual manera, durante estas décadas avanzó el dominio corporativo ejercido por el PRI sobre las clases trabajadoras, populares y campesinas. Este control significó que sus reivindicaciones y formas de organización fueran mediadas por las centrales corporativas, además de que las autoridades tuvieran participación en sus asambleas y decisiones (Archivo Municipal de Torreón (AMT), obras públicas, caja 23, exp. 15, ff. 4-5).

Si bien, este control consiguió desarrollarse con relativa estabilidad, comenzó a ser desafiado a comienzos de los años setenta. A su llegada al poder, el presidente Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de restablecer la legitimidad del régimen tras la represión que sufrió el movimiento estudiantil en 1968, decretó la *apertura democrática*, la cual significó distanciarse de las centrales del PRI, la tolerancia a las organizaciones *independientes* y otorgar la libertad a presos políticos (Roxborough y Zapata, 1983; de la Garza, 1988; Carr, 1996). En el marco de esta situación comenzó el ascenso de la insurgencia obrera en la región, protagonizada, principalmente, por el *sindicalismo independiente nacionalista revolucionario* el cual estaba representado por el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, así como por el STERM, ambos reivindicaban que “la revolución mexicana, traicionada por gobiernos antipopulares,” podía ser “perfectible a través de una reorientación del Estado mexicano en favor de las mayorías” (Melgoza y De la Garza, 1996, p. 147).

En la Laguna, el movimiento estudiantil estaba viviendo un importante desarrollo desde mediados de 1960; asimismo, a partir de 1970, distintas organizaciones como la Liga Comunista Espartaco, el Partido Mexicano del Proletariado, Política Popular y el grupo Nazas Aguanaval, conformado por sacerdotes afines a la teología de la liberación, se vincularon con los sectores populares. Particularmente, la intervención de estas dos últimas fue fundamental para la articulación de trabajadores y colonos. (Puma, 2014; Sánchez, 2020; Soto, 2022). Por un lado, Política Popular fue fundada en el Distrito Federal por estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional que eran miembros de la Coalición de Brigadas Emiliano Zapata después de

la represión contra el movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968. Bajo los lineamientos maoístas de la línea de masas,¹ debido a la formación política de su dirigente Adolfo Orive, los primeros militantes de la organización buscaron “integrarse a las masas” en los estados de Oaxaca, Nayarit, Durango y Nuevo León, entre finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. La llegada de sus militantes a la Comarca Lagunera en 1971 coincidió con el ascenso del movimiento estudiantil, así como con la presencia de pequeños grupos de formación marxista integrados por estudiantes y docentes, y con las protestas de los ferrocarrileros. Su arribo fue posible gracias al vínculo que establecieron con los sacerdotes del Nazas Aguanaval. Después de su llegada, la organización nutrió sus cuadros locales de los dos primeros y se integró en la lucha sindical de los terceros, para después expandirse a instituciones de educación media y universitaria (Soldatenko, 2018; Soto 2020; Yanuel y Puma, 2023).

Por su parte, el grupo de sacerdotes Nazas Aguanaval fue producto de las dinámicas organizativas que se gestaron en la Diócesis de Torreón fundada a finales de 1950 y de las transformaciones que experimentó la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II y de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín (Navarro, 2016). Bajo el liderazgo del Obispo Fernando Romo se promovieron actividades para organizar a los laicos a lo largo de los años sesenta, en las cuales participaron los futuros miembros de la agrupación. Hacia 1971, el presbítero Pedro Velázquez, encargado del Secretariado Social Mexicano, arribó a la Diócesis para hablar sobre los lineamientos de la Conferencia Episcopal de Medellín. La buena recepción del mensaje quedó fijada en una carta del Obispo dirigida a los laicos en la que destacaba la urgencia de construir una sociedad más justa. En ese momento, el Nazas Aguanaval surgió de la mano de jóvenes sacerdotes como Benigno Martínez, José Batarse y Armando Sánchez de la O. Estos sacerdotes participaban en grupos de religiosos y laicos, donde, basándose en los lineamientos de Medellín y del materialismo histórico, reflexionaban sobre la realidad mexicana. Además, habían presenciado las experiencias organizativas latinoamericanas promovidas por sacerdotes católicos, como lo hizo Sánchez de la O durante sus viajes por Colombia, Chile, Argentina y Brasil a finales de los años sesenta. (De la Torre, 2006; Sánchez de la O, 2021; Archivo General de la Nación (AGN), Secretaría de Gobernación, Dirección Federal de Seguridad, caja 370/4223, exp. 15-3, leg. 18, ff. 230-231). El contacto entre los grupos se fraguó en

1 Mao Tse-tung (1976, p. 119) explicó que la Línea de Masas es un método de dirección aplicado por el Partido Comunista Chino. El cual está basado “necesariamente en el principio: ‘de las masas, a las masas’. Esto significa recoger las ideas (dispersas y no sistemáticas) de las masas y sintetizarlas (transformarlas, mediante el estudio, en ideas sintetizadas y sistematizadas) para luego llevarlas a las masas, difundirlas y explicarlas, de modo que las masas las hagan suyas, perseveren en ellas y las traduzcan en acción, y comprobar en la acción de las masas la justeza de esas ideas.”

1971 en la ciudad de Durango a través de Batarse y, el miembro de Política Popular, Alberto Anaya. Desde la formación de sus primeros cuadros en la región la organización se vinculó con los sacerdotes. El punto de coincidencia era que ambos consideraban que los sectores populares podían constituirse en “sujetos de su propia historia” más allá de vanguardias y liderazgos externos que les impusieran sus objetivos (Martínez, 2021; Puma, 2022).

Para finales de 1970, ocurrieron las primeras protestas cuando los ferrocarrileros de la sección 27 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, ubicada en Torreón, denunciaron en la prensa que el grupo sindical Héroe de Nacozari impuso a los candidatos para la elección de secretario seccional y general del sindicato. Además, comenzó a circular el rumor del posible arribo del líder disidente Demetrio Vallejo, quien había sido liberado en 1970.² Lo cual se hizo realidad a finales de noviembre de ese año. Vallejo mantuvo una asamblea en la Universidad de Coahuila (UC) con ferrocarrileros y estudiantes, en la cual se acordó iniciar el Movimiento Sindical Ferrocarrilero para constituirse en una fuerza política nacional y conseguir el cumplimiento del *Programa de Lucha*. En el documento incluían reivindicaciones en torno al mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, propuestas sobre el papel de los ferrocarriles mexicanos en el desarrollo económico nacional y, sobre todo,

2 Nacido en Juchitán, Oaxaca, en noviembre de 1910, Demetrio Vallejo comenzó a trabajar en Ferrocarriles Nacionales de México a finales de los años veinte y se afilió al recién fundado Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) en 1933. Un año después, ingresó al Partido Comunista Mexicano (PCM), donde militó hasta 1947, momento en que fue expulsado por expresar críticas hacia la dirigencia. En 1950, se unió al Partido Obrero-Campesino México (POCM), y durante esos años llevó a cabo labores de agitación y organización con ferrocarrileros, petroleros y azufreros de Oaxaca. Este compromiso le valió el nombramiento como secretario general del Comité de Coatzacoalcos del PCM. Paralelamente a su militancia comunista, Vallejo se mantuvo activo en la vida sindical, participando en luchas por mejoras salariales y la democratización del sindicato. Vallejo emergió como uno de los principales líderes del movimiento ferrocarrilero en medio de una coyuntura marcada por la movilización de maestros, telegrafistas y estudiantes a finales de 1958. Fue elegido secretario general del STFRM ese mismo año, tras derrotar a la planilla alineada con el gobierno. A través de paros y movilizaciones callejeras, protestó por mejoras salariales, la democratización de los sindicatos y la depuración del sindicato de dirigentes que no representaban los intereses de los trabajadores. En febrero de 1959, el sindicato, con Vallejo a la cabeza, emplazó a huelga exigiendo la revisión contractual, aumento salarial y prestaciones. La posibilidad de huelga en uno de los sectores estratégicos de la economía desencadenó la represión gubernamental en marzo de ese año. Vallejo y otros trabajadores fueron recluidos en la cárcel de Lecumberri bajo acusaciones de “disolución social”. Finalmente, en septiembre de 1970, tras la derogación del delito de “disolución social”, fue liberado junto a otros presos políticos como Valentín Campa. En los años siguientes, sus esfuerzos se centraron en reorganizar a los trabajadores en el Movimiento Sindical Ferrocarrilero (Hernández, 2011).

demandas encaminadas a impulsar la democracia sindical basada en asambleas que “sean soberanas y sean organismos en donde los trabajadores expongan con entera libertad sus problemas y tengan oportunidad de protestar en contra de los representantes sindicales que no atienden sus problemas” (AMT, seguridad pública, caja 3, exp. 1).

Las protestas de las secciones ferrocarrileras laguneras estuvieron coordinadas con las movilizaciones que realizó el MSF en otros estados como Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca. La estrategia principal fue la toma de los edificios sindicales, tal como ocurrió en enero y noviembre de 1972 cuando tomaron los edificios sindicales de Torreón y Gómez Palacio. Durante este periodo, el sacerdote Benigno Martínez junto a militantes de Política Popular hijos de ferrocarrileros estuvieron presentes en las tomas y manifestaciones demostrando su apoyo a los trabajadores (Martínez, 2021). Los edificios continuaron bajo control del movimiento hasta el 19 de diciembre, día en el que militares, policías e integrantes del grupo Héroe de Nacozari “provistos de armas largas y cortas” irrumpieron desalojando a la poca resistencia que encontraron a su paso (El Siglo de Torreón, 20 de diciembre de 1972, p.1). A pesar de las posteriores protestas que realizó el MSF, el desalojo y la persecución de los trabajadores más combativos fueron agotando al movimiento (Torres, 2021).

A partir de enero de 1971, inició el movimiento de los electricistas de la sección 39 con la disputa por el contrato colectivo entre el STERM, liderado por Rafael Galván, que pugnaba por la democracia sindical, y el Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNESCRM) liderado por Francisco Pérez Ríos, afín al régimen y al Congreso del Trabajo.³ En esta

3 Rafael Galván, nacido en Uruapan, Michoacán, el 7 de noviembre de 1919, cursó sus estudios universitarios en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. En 1937, inició otra licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se introdujo en las discusiones marxistas y estableció relaciones con destacados políticos defensores del nacionalismo revolucionario, como Narciso Bassols y Jesús Silva Herzog. Al mismo tiempo, trabajaba en la radiodifusora “Radio Revolución” del Partido de la Revolución Mexicana. Como trabajador, Galván organizó la fundación del órgano informativo del Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Industria de la Radio, del cual fue nombrado secretario general en 1943. A principios de los años cincuenta, incursionó en la industria eléctrica, donde impulsó la creación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas. Defendió una visión progresista de la Revolución Mexicana, en la que el Estado surgido de ella debía promover reformas sociales para mejorar las condiciones de los trabajadores y las clases populares. Asimismo, abogó por la democracia sindical y la unificación de los sindicatos que representaban a los trabajadores electricistas, siendo crítico de los líderes obreros subordinados a empresas y gobierno. Durante la nacionalización de la industria eléctrica por el presidente Adolfo López Mateos en 1960, Galván trabajó por consolidar la unificación sindical, lo que dio lugar al surgimiento del Sindicato de Traba-

disputa, el Sindicato Nacional argumentaba que le correspondía la titularidad del contrato colectivo por ser el sindicato mayoritario. Su demanda fue llevada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual falló a su favor (Gómez y Miquet, 1997; Escobar 2021, 124).

Para defender la titularidad del contrato colectivo, el STERM promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y movilizó de manera coordinada a sus secciones entre 1971 y 1972. En la Laguna, los electricistas realizaron marchas, mítines y representaciones teatrales en las calles principales del centro de Torreón y Gómez Palacio. Las organizaciones obreras del PRI realizaron acciones para enfrentar la rebeldía de los electricistas. Por ejemplo, en mayo de 1972, los integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), marcharon por las calles de Gómez Palacio mostrando mantas en las que expresaban su apoyo a Fidel Velázquez y a Francisco Pérez Ríos, mientras que otras rezaban “Fuera Galván y su pandilla”, “Fuera Vallejo” y “Arriba la CTM” (El Siglo de Torreón, 18 de mayo de 1972, p. 8).

Por su parte, los actos de los electricistas estuvieron respaldados por contingentes de estudiantes, obreros de empresas privadas, sacerdotes, profesores, campesinos y, como se verá más adelante, pobladores integrantes del movimiento urbano regional (La Opinión, 23 de abril de 1972, p. 4). A diferencia de los ferrocarrileros, no realizaron acciones que significaran el enfrentamiento abierto contra los aparatos del Estado. Por el contrario, durante una concentración un electricista mencionó que “el STERM, que preside Rafael Galván, está de acuerdo con la política del Presidente Echeverría, pero no con la actitud de algunos de sus colaboradores que se dejan sobornar y venden la justicia, pisoteando la Constitución y las leyes mexicanas” (El Siglo de Torreón, 28 de enero de 1972, p. 1). Las manifestaciones se extendieron hasta octubre del 72, cuando el gobierno federal decretó la unificación de los dos sindicatos y con ello la fundación del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) (El Siglo de Torreón, 30 de agosto de 1972, p. 7). Ante ello, Jaime Vargas, secretario seccional del STERM, mencionó, durante una concentración en la plaza principal de Torreón, que la integración de la industria eléctrica y la fusión de los sindicatos electricistas “marca el inicio de la democratización en el movimiento obrero na-

jadores de la República Mexicana, del cual fue elegido secretario general. A mediados de esa década, fue electo senador por el estado de Michoacán, donde abogó por reformas sociales, el derecho a la asociación pacífica y en contra del delito de disolución social. En 1970, al concluir su mandato como legislador, regresó a su cargo como secretario general en el STERM y comenzó a promover las “Jornadas por la Democracia Sindical”, con el propósito de unificar los tres sindicatos electricistas existentes: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (Trejo, 1990).

cional”. El secretario finalizó agradeciendo el apoyo que recibieron “de parte de diversas organizaciones, durante su pasado conflicto con el Sindicato Nacional de Electricistas” (El Siglo de Torreón, 27 de octubre de 1972, p. 13).

La formación de las colonias independientes y la participación del sindicalismo nacionalista revolucionario. El inicio del Movimiento Social Urbano en la Comarca Lagunera

De manera similar a los sindicalistas independientes, integrantes de los sectores populares urbanos que se encontraban controlados por la priista Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) comenzaron a desafiar el dominio corporativo y a formar colonias populares denominadas *independientes* donde se organizaban, tomaban sus acuerdos y trazaban la ruta de la protesta para conseguir el mejoramiento material del asentamiento sin la tutela del PRI. En la región, el movimiento urbano consiguió desarrollarse por la articulación que ciertos colonos disidentes de las organizaciones priistas lograron establecer con otras movilizaciones, por ejemplo, la obrera.

La primera articulación entre los colonos y obreros, y con ello el inicio del movimiento urbano, ocurrió a finales de marzo de 1972 cuando un grupo de pobladores, integrantes de la Unión de colonos Santa María, decidieron desconocer a su dirigente Jesús Landeros, debido a sus constantes engaños y cobros de cuotas, para negociar por su cuenta la permanencia en los terrenos de los que se posesionaron al oriente de Torreón. A pesar de intentarlo, las negociaciones con las autoridades no rindieron fruto y, el 6 de abril, la policía municipal desalojó a las 400 familias que tomaron los terrenos. No obstante, la historia no terminaría ahí. Luego del desalojo, los pobladores buscaron el apoyo de los estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de la Laguna (ITRL), quienes en ese momento habían tomado la escuela exigiendo la construcción del Consejo Técnico Paritario (La Opinión, 7 de abril de 1972).

Los estudiantes respondieron de manera favorable y junto a los colonos acudieron nuevamente a posesionarse de los terrenos. Hay que señalar que al interior del contingente estudiantil había jóvenes que ya militaban en Política Popular (Hernández, 2013). Su intervención hizo posible que más militantes y grupos de estudiantes, ferrocarrileros del MSF y electricistas de la sección 39 del STERM, que ya habían entrado en contacto con la organización, acudieran al asentamiento para respaldar a los pobladores los días siguientes. Estos sectores continuaron respaldando a los colonos en las manifestaciones públicas que realizaron entre marzo y octubre de 1972, con las cuales consiguieron negociar la adquisición de los terrenos a un precio y una modalidad “acorde con sus posibilidades”. Tam-

bién, fundaron un asentamiento llamado colonia independiente Tierra y Libertad y una unión de colonos homónima (AMT, seguridad pública, caja 38, exp. 1).

Durante este ciclo de protestas se detectan expresiones que indican la alianza establecida entre trabajadores y colonos, así como la manera que los manifestantes concebían a las instituciones gubernamentales encargadas de las problemáticas urbanas como el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular (INDECO). A principios de octubre, la Unión de Colonos Independiente Tierra y Libertad acompañada de ferrocarrileros, estudiantes y electricistas se manifestaron a las afueras del instituto cargando mantas que decían: “INDECO, empresa de ricos”, “INDECO empresa transa” y “STERM, Movimiento Sindical Ferrocarrilero y Paracaidistas Unidos”⁴ (AGN, Secretaría de Gobernación, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, caja 1123, exp. 5, ff. 135-137).

A lo largo de este proceso, los militantes de Política Popular que asistieron en apoyo acordaron integrarse al asentamiento y pasaron a vivir como un poblador más. Junto a ellos, los colonos desarrollaron un método de organización interno que consideraba a la asamblea general como máximo órgano de decisión. En estas asambleas se discutían las demandas, las formas de protesta, se organizaban comisiones para la negociación con las autoridades, para las guardias del asentamiento, así como para la autoconstrucción (Puma 2021; Soto, 2022). El historiador Ricardo Fuentes (2020, pp. 169-170) destacó que las asambleas implementadas por Política Popular se basaban en los métodos de “preguntas y respuestas” y “pretextos objetivos”. Los cuales consistían en que los militantes realizaban preguntas orientadoras para que los participantes establecieran sus problemáticas y demandas, las cuales eran consideradas por Política Popular como pretextos para caminar hacia el objetivo central: conseguir la organización de los sectores populares.

Otra experiencia en la que se reconoce la incidencia de integrantes de la *insurgencia sindical* en el inicio del movimiento urbano la encontramos cuando los habitantes de la colonia Prolongación División del Norte de Torreón se independizaron del control priista, que ocurrió cuando un grupo de pobladores que también era ferrocarrileros de la sección 27, buscaron el apoyo de los militantes de Política Popular, que estaban haciendo trabajo político en la sección, para hacer frente a la mesa directiva priista de la colonia. Este contacto dio pie a que los militantes se integraran a la colonia para llevar a cabo asambleas con los pobladores, las cuales cada vez sumaron más habitantes. Finalmente, en febrero de

⁴ En México, se le denomina “paracaidistas” a quienes invaden terrenos urbanos públicos o privados casi siempre de manera ilegal para la construcción de sus viviendas (Cornelius, 1986, p. 42).

1973, decidieron “por acuerdo de asamblea” desconocer a la mesa directiva de la colonia y constituirse en *colonia independiente* extendiendo sus relaciones con los pobladores de Tierra y Libertad (Hernández, 2013, p. 113).

Los meses siguientes, los habitantes de la Prolongación, junto a colonos de Tierra y Libertad, ferrocarrileros, electricistas, militantes y trabajadores del Departamento de Limpieza de Torreón, realizaron manifestaciones para conseguir la introducción de servicios, principalmente la red de agua, y evitaron que se construyera un cuartel de policía en su interior (AMT, seguridad pública, caja 40, exp. 1). Algunos sacerdotes, como Benigno Martínez estaban en contacto con los ferrocarrileros y con Política Popular; esta relación permitió que con la integración de los militantes al asentamiento se abriera un canal para que también lo hicieran los religiosos. En ese sentido, entre los meses de julio y agosto de 1973, se hizo común que acudieran integrantes de ambos grupos para apoyar a los colonos en la construcción de su organización de la colonia, específicamente para implementar el método asambleario que ya se había aplicado en Tierra y Libertad (Muñoz, 2020; El Siglo de Torreón, 22 de agosto de 1973, p. 8). Para finales de agosto, el movimiento decidió apropiarse de un pequeño terreno aledaño a su colonia. Para dirigir la toma un grupo de pobladores, que en ese momento comenzaban a recibir formación política, militantes y sacerdotes organizaron el Comité Coordinador con el cual dirigieron a cerca de 80 familias de diversas colonias populares, muchas de ellas familiares y amigos de los habitantes de la Tierra y Libertad y de la Prolongación, para invadir exitosamente los terrenos. (El Siglo de Torreón, 27 de agosto de 1973, p. 7).

La participación de las colonias independientes en la insurgencia obrera en la Laguna

El apoyo entre trabajadores y colonos fue recíproco, dado que una vez constituidas las *colonias independientes* éstas apoyaron las movilizaciones de la clase obrera en la región. En ese sentido, la participación del movimiento urbano en la insurgencia obrera consta de dos momentos. El primero, fue en apoyo al *sindicalismo independiente nacionalista revolucionario* protagonizado por ferrocarrileros y electricistas en 1972. El segundo, consistió en el respaldo a las protestas de los empleados del Departamento de Limpieza de Torreón y de los peones de la hacienda vitivinícola Batopilas en 1973 y 1976, respectivamente.

Entre los meses de junio y octubre de 1972, los colonos de Tierra y Libertad estuvieron presentes en las protestas de la sección 39 del STERM. Los pobladores marcharon junto a electricistas, ferrocarrileros y estudiantes en la protesta del 29 de junio que partió del local sindical en Gómez Palacio y culminó en la plaza

de armas de Torreón (La Opinión, 30 de junio de 1972, p. 3). Posteriormente, el STERM realizó otra protesta la noche del 29 de agosto. En el acto electricistas, ferrocarrileros, estudiantes y habitantes de Tierra y Libertad cargaban antorchas que alumbraban el recorrido de la manifestación (El Siglo de Torreón, 30 de agosto de 1972, p. 7). Finalmente, cuando los trabajadores del STERM marcharon por Gómez Palacio y Torreón el día 27 de octubre para posicionarse a favor de la integración de la industria eléctrica y la fusión de los dos sindicatos que disputaban el contrato colectivo, estuvieron acompañados nuevamente por Ferrocarrileros, obreros, estudiantes y por los colonos (Ibíd, 27 de octubre de 1972, p. 13).

El apoyo de los pobladores a los integrantes del MSF se hizo explícito después de que los segundos fueran desalojados de los edificios sindicales. Ante tal situación, los colonos de Tierra y Libertad, así como estudiantes, profesores, militantes de Política Popular y trabajadores de limpieza, se sumaron a las protestas que los ferrocarrileros realizaron durante el mes de diciembre. Otro elemento que muestra la relación entre pobladores y ferrocarrileros, lo dieron a conocer los militares que retomaron el control del edificio de la sección 27 al informar que en su interior encontraron que el mimeógrafo fue utilizado para elaborar documentos del movimiento ferrocarrilero, de la Tierra y Libertad y de los empleados de limpieza (Ibíd, 20 de diciembre de 1972, p. 1).

En este primer momento las *colonias independientes* se sumaron para apoyar a sindicatos de empresas públicas nacionales, cuya protesta estaba orientada por objetivos de alcance nacional, como la reorientación de la actividad económica de las empresas, la democracia sindical y la defensa del contrato colectivo de trabajo. Si bien, el apoyo entre el movimiento urbano y obrero fue recíproco, ya que hay participación y solidaridad en las manifestaciones de la clase obrera y una vez tomado el edificio sindical se utilizó el mimeógrafo para producir propaganda al servicio del movimiento obrero y urbano, no se observan intentos por construir una estructura orgánica que articule a los integrantes de ambos movimientos.

A continuación, se observará el segundo momento que las *colonias independientes* apoyaron la insurgencia obrera. Para ello, se reconstruirá primero la protesta protagonizada por los trabajadores del Departamento de Limpieza Municipal de Torreón y después la de los peones de Batopilas ubicada en Francisco I. Madero, del estado de Coahuila. La participación del movimiento fue fundamental para la protesta de los empleados de limpieza, ya que, desde la segunda mitad de 1972, en la colonia Tierra y Libertad se comenzaron a organizar para luchar por mejores condiciones laborales en el Departamento, esto debido a que algunos de sus habitantes a su vez trabajaban como empleados de limpieza. Fueron ellos quienes mantuvieron reuniones con los colonos más combativos y los

militantes de Política Popular (Venancio, 2021). En noviembre, los trabajadores realizaron un paro de labores exigiendo mejoras salariales, jornada laboral de 8 hrs. (trabajaban de 12 a 16 horas diarias), séptimo día de descanso, vacaciones, acceso a servicio médico, creación del segundo turno y reparar los camiones recolectores de basura. El alcalde saliente, Juan Abusaid Ríos, acordó cumplir sus demandas salvo los dos últimos puntos, los cuales serían resueltos por el nuevo mandatario José Solís Amaro (La Opinión, 22 de noviembre de 1972, p. 2).

No obstante, una vez que llegó al poder, Solís Amaro se negó a negociar con los trabajadores argumentando que eran influidos por “gente ajena al Departamento” que promovía el “tortuguismo” y la “apatía” en ellos, lo que provocaba la acumulación de basura en la ciudad. Anunció, además, que se reestructuraría la organización del trabajo en el Departamento aumentando la vigilancia durante la recolección de basura y que, en caso de ser necesario, se despediría a los empleados que no cumplieran con su función. En sintonía con las declaraciones del mandatario, aparecieron notas en la prensa local que acusaban que los recolectores hacían tortuguismo, trabajaban sólo 4 horas diarias, recogían la basura que podían vender y que grupos de “agitadores” incitaban al tortuguismo y a oponerse a la reestructuración (Ibíd, 12 de enero de 1973, p. 7; El Siglo de Torreón, 17 de enero de 1973, p. 16).

Ante ello, las esposas de los trabajadores se reunieron con el alcalde para explicarle que la acumulación de basura se debía a que los camiones estaban averiados o en malas condiciones y que al reducir la jornada laboral a 8 horas no les alcanzaba para cubrir todos los rincones de la ciudad, por lo que la propuesta de sus esposos era la creación de un doble turno y la adquisición de una nueva flota de vehículos. Empero, las aclaraciones de las mujeres no fueron tomadas en cuenta y, el 12 de febrero, el gobierno municipal despidió a dos trabajadores acusándolos de sabotear dos camiones recolectores. Esta acción reactivó la movilización. Las semanas siguientes, los empleados, junto a pobladores de Tierra y Libertad, la Prolongación División del Norte, estudiantes y militantes de Política Popular, realizaron manifestaciones que culminaban en la presidencia municipal para intentar dialogar con el alcalde. A la par de estos actos, los manifestantes distribuían volantes a su paso. Por ejemplo, en la manifestación del 21 de febrero, repartieron un documento en el que reprobaron la actitud “negativa, pasiva e irresponsable del Presidente Municipal, por no aceptar, tajantemente, entablar relaciones directas y personales con los trabajadores para la solución del conflicto obrero-patronal”, y denunciaban la represión “despótica” que la alcaldía ejerció sobre la “organización trabajadora cesando a dos de sus miembros” (AMT, seguridad pública, Caja 40, Exp 1). Para este momento Política Popular ya estaba presente en la Prolongación División del Norte, así como en diversas escuelas

de la región, por lo que, la organización hizo de puente para que tanto colonos como estudiantes apoyaran la protesta de los trabajadores (Muñoz, 2020).

El 12 de abril la situación se agudizó porque el municipio volvió a la ofensiva al despedir a 24 empleados. En respuesta, los trabajadores, respaldados por militantes y pobladores, pararon labores e intensificaron sus acciones. Así, entre abril y mayo, brigadas del movimiento realizaron actos de sabotaje como averiar y secuestrar camiones recolectores de basura, de ruta y patrullas policíacas, así como esparcir basura por la ciudad y lanzar piedras a la presidencia municipal y al departamento de limpieza. Al calor de las protestas, las autoridades municipales intentaron neutralizar la movilización promoviendo, sin éxito, la campaña “Escoba Dominical”, la cual buscaba agrupar a campesinos, jóvenes conscriptos, desocupados y trabajadores voluntarios para realizar la recolección de basura (AMT, seguridad pública, caja 40, exp. 1).

Asimismo, a principios de mayo, las autoridades organizaron grupos de choque integrados por pandilleros reclutados de barrios populares. Por otro lado, se observa que después del despido de los 24 empleados el movimiento organizó *asambleas populares* que concentraron a trabajadores de limpieza, pobladores de las *colonias independientes*, amas de casa, estudiantes, militantes de Política Popular y sacerdotes (AMT, seguridad pública, caja 40, exp. 1). A través de este instrumento que articulaba a distintos sectores de la sociedad que apoyaban a los empleados de limpieza, se discutía el curso de la lucha. Por ejemplo, ante la organización de los grupos de choque y la negativa de reinstalar a los despedidos, se acordó, en una *asamblea popular* organizada en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Torreón, agudizar la protesta a través del secuestro de camiones y patrullas, así como manifestarse a las afueras de la casa del alcalde (El Siglo de Torreón, 5 de mayo de 1973, p. 11).

La tensión aumentó porque las organizaciones patronales de la región; entre las que se encontraban las Cámaras municipales de la industria de la transformación y del comercio, el Centro Patronal de Torreón, la Asociación Algodonera de la Laguna, así como el Centro Bancario de Torreón, manifestaron su “más ENERGICA PROTESTA” para exigir a las autoridades municipales y estatales que aplicaran “TODO EL RIGOR DE LA LEY A ESTOS DELINCUENTES” y advirtieron que no suprimir esa “clase de actos [...] puede obligar a estas instituciones, a tratar de proteger los intereses de sus asociados en la forma que mejor convenga” (La Opinión, 5 de mayo de 1973, p. 5). Finalmente, un par de días después, la protesta concluyó cuando las autoridades y el movimiento concretaron una serie de negociaciones de las cuales se resolvió indemnizar a los despedidos, que no existiría represalias contra los trabajadores que se fueron a paro y que las nuevas contrataciones darían preferencia a familiares de trabajadores. Después de la ne-

gociación, los empleados publicaron en la prensa un manifiesto exponiendo que habían aceptado llegar a un acuerdo para “evitar el enfrentamiento directo, hasta donde fuera posible y una masacre”; además, agradecieron a los sectores que los apoyaron destacando que “la UNIÓN EN LA LUCHA ES LA UNICA ALTERNATIVA que tenemos los humildes y explotados para defendernos de los ricos y explotadores” (Ibíd, 8 de mayo de 1973, p. 1).

A partir de 1974, el *movimiento social urbano* se expandió y comenzó a coordinar por su cuenta nuevas invasiones en otras ciudades de la Laguna. Lo cual llevó a que entre ese año y 1976 se fundaran siete nuevas *colonias independientes* articuladas entre ellas y que tomaban sus decisiones a través de las asambleas que se hacían en su interior, las cuales fueron: Ricardo Flores Magón, Rubén Jaramillo y Jacinto Canek en Gómez Palacio; Pancho Villa y Camilo Torres en Torreón; 2 de Marzo en Francisco I Madero y Emiliano Zapata en San Pedro (Hernández, 2013). Además de esto, desde finales de 1972, comenzó un proceso de formación política a través de círculos de estudio dirigido a los pobladores que mostraban mayor compromiso con el movimiento, el cual tuvo por objetivo que se integraran a Política Popular y estaba coordinado por los militantes. Práctica que se reprodujo en cada una de las colonias que formaban parte del movimiento urbano, dando como resultado el surgimiento de militantes de extracto popular (Sánchez, 2020; García, 2021 Soto, 2022).

Mientras ocurría la expansión del movimiento urbano, un grupo de peones que trabajaban en la hacienda vitivinícola Batopilas, ubicada en el área rural del municipio de Francisco I Madero y que desde 1960 pertenecía a la familia Suárez, quienes residían en la Ciudad de México, comenzaron a realizar, junto con sacerdotes del Nazas Aguanaval y militantes de Política Popular, pequeñas reuniones clandestinas debido a que desde 1973 los propietarios intentaron reorganizar la producción al intentar sustituir la viña por el algodón, esto ocasionó que se ordenara a los administradores que podaran secciones de las parras. Acción que alertó a los trabajadores, quienes consideraban que las nuevas medidas se realizaban para quebrar a la empresa y despedirlos sin indemnizaciones. Los peones entraron en contacto con Política Popular y el Nazas Aguanaval debido a que el sacerdote Benigno Martínez, asignado a la parroquia de Francisco I Madero, comenzó a reunirse con los trabajadores a inicios de 1975. Benigno, al conocer su situación, hizo de canal para que militantes integrados en las *colonias* se sumaran a las reuniones en Batopilas (Riera, 2016, p. 177).

La relación con militantes y sacerdotes hizo posible que los trabajadores se conectaran con los habitantes de las *colonias* a lo largo de 1975. Lo cual consistió en visitas de los peones a los asentamientos y viceversa. En las reuniones, los pobladores les explicaban sus métodos de organización y la lucha que hicieron. El

historiador Juan Riera detectó que las fiestas de aniversario que realizaban eran claves para fraguar la unificación entre ambos sectores (Ibíd, 2016, pp. 212-214).

A finales de 1975, la preocupación entre los trabajadores aumentó cuando la administración intentó correr a algunos y sobornó al líder natural de los trabajadores, que había promovido la firma del contrato colectivo de trabajo en 1973. La situación se recrudeció con la suspensión de los salarios en noviembre. En respuesta, los peones conformaron la Coalición de Trabajadores de Batopilas y protestaron en las oficinas del periódico *La Opinión* para pedir el apoyo del pueblo y asesoría legal, pues aseguraban “les adeudan cinco semanas de sueldo y no hay esperanzas de que se les cubran” (*La Opinión*, 20 de diciembre de 1975, p.1).

Para el año siguiente, ya estaban organizados en la Coalición y contaban con un sólido respaldo del movimiento urbano, así como de los militantes de Política Popular, y mediante estos eran asesorados por los abogados Federico O’ Reilly y Federico Eppen. Con este apoyo, el 15 de enero de 1976, emplazaron a huelga a la empresa debido al incumplimiento del pago de salarios, del aguinaldo y de las vacaciones. Asimismo, acusaban que no se construyó la escuela acordada tras la firma del contrato colectivo. Ante la respuesta negativa por parte de la empresa, los trabajadores estallaron la huelga el día 27. Rápidamente, organizaron comisiones para montar guardias a las afueras de la hacienda y realizar difusión en los ejidos y colonias populares de la región, acciones en las que se involucraron brigadas del movimiento urbano. Días después, el 13 de febrero, la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró existente la huelga, lo que dio pie a que colonos y estudiantes mostraran públicamente su apoyo a los trabajadores (*La Opinión*, 15 de febrero de 1976, p. 2).

Para las autoridades coahuilenses y los propietarios locales, el problema de Batopilas era un peligro porque podía incentivar la movilización campesina y disputar el control que ejercía el PRI mediante la Confederación Nacional Campesina (CNC) desde los años posteriores al gobierno cardenista. Por lo tanto, ambos sectores estaban interesados en que el problema fuera resuelto lo más pronto posible. Para ello, el gobernador de Coahuila, Oscar Flores Tapia, designó a Mariano López Mercado, oficial mayor del estado, intermediario en las negociaciones entre la empresa y los trabajadores, quien, tras reunirse con el movimiento, propuso que los propietarios los indemnizaran con un pago inicial de 700 mil pesos mexicanos en efectivo y, en el plazo de un mes, con otro de 1 millón 300 pesos, con el cual los trabajadores comprarían una pequeña propiedad para trabajarla colectivamente. A partir de este momento, el movimiento comenzó a insertar características agrarias a sus reivindicaciones apelando a que se les indemnizara para poder adquirir tierras laborables (*La Opinión*, 27 de febrero de 1976, p.1).

El plazo que se le dio a la empresa para realizar los pagos correspondientes vencería el 30 de marzo. Durante esas semanas, la presión por parte del movimiento aumentó y la articulación entre trabajadores y colonos se hizo cada vez más determinante. Por ejemplo, para enfrentar el desgaste que representaba sostener las guardias en la hacienda, comisiones conformadas por colonos se sumaron para relevar a los peones. Asimismo, participaron junto a los trabajadores y militantes en las brigadas de difusión. Los pobladores, además, dotaban de comida y víveres a los trabajadores para que pudieran sostener la huelga. Esta forma de participación fue fundamental durante el campamento que montaron los peones a las afueras de las oficinas de recaudación de rentas de Torreón para presionar al gobierno estatal el 15 de marzo. Durante las semanas que duró, las nueve *colonias independientes* se organizaron para preparar la alimentación de cada día de los manifestantes y participaban en la seguridad tanto del campamento como en las guardias de la hacienda. Finalmente, el día 30 llegó. La patronal no dio respuesta a las demandas, por lo que el movimiento comenzó a plantear la posibilidad de tomar las tierras.

Para trazar la estrategia el movimiento organizó amplias asambleas generales. La primera se realizó en el campamento de la recaudación de rentas unos días después de que venció el plazo. En esta reunión se decidió levantar el campamento y acumular fuerzas a través de la difusión en colonias y ejidos para la posible toma de tierras. Acordaron, además, que el gobernador de Coahuila tendría hasta el día 21 de abril para dotarles de tierras. El día llegó y la dotación no sucedió por lo que el movimiento realizó un gran mitin en el centro de Torreón para anunciar la toma. El desplazamiento hacia Batopilas ocurrió el día siguiente. Los pobladores de todas las *colonias*, estudiantes, electricistas, obreras textiles, profesores, sacerdotes, militantes de Política Popular y los peones junto a sus familias se trasladaron a bordo de camiones. La caravana que agrupó a cerca de tres mil personas fue encabezada por un motociclista que cargaba una bandera roja. Al llegar a la hacienda se realizó una segunda asamblea general en la cual se decidió continuar con la toma de tierras a pesar de las consecuencias legales, pues se daba pie a que la empresa los acusara de despojo y daños a la propiedad (Riera, 2016, pp. 303-307).

A pesar del riesgo el contingente avanzó sobre las tierras. Así, al medio día y bajo el intenso sol primaveral de la región, mujeres, hombres y niños de los distintos sectores con manos y azadones empezaron con la limpia del terreno; además, organizaron comisiones para montar guardias, planear el riego e iniciar la reparación de las norias averiadas (El Siglo de Torreón, 23 de abril de 1976, p. 21). A pesar de que la invasión no obtuvo la aprobación ni de las organizaciones campesinas del PRI, ni de la prensa local que acusaba que había sido un acto

realizado con fines meramente políticos, y a pesar de que se realizó cuando las organizaciones de propietarios exigían a las autoridades municipales y estatales frenaran las invasiones a terrenos urbanos, el gobernador de Coahuila no dio el orden de reprimir al movimiento. Finalmente, el 20 de mayo, oficializó la dotación de tierras para su constitución en ejido, dado que como se mencionó, la problemática de Batopilas podía extender la agitación en la zona rural de La Laguna y, además, dotarles de tierras abría la posibilidad para que en un futuro el Estado buscara cooptar a los nuevos ejidatarios (La Opinión, 21 de mayo de 1976, p. 1). La fundación de Batopilas dio pie al entrelazamiento entre trabajadores, colonos y campesinos entretejido por los militantes de Política Popular y sacerdotes. En Batopilas sus integrantes también implementaron las asambleas para tomar sus decisiones y el ejido aportó nuevos cuadros a la organización de extracto campesino. La relación entre el movimiento obrero, campesino y urbano popular que germinó en los años estudiados pondría en juego su fortaleza a partir de octubre 1976 cuando el gobierno municipal de Torreón y del estado de Coahuila puso en marcha una estrategia represiva contra sus integrantes, debido a las protestas de la Unión de Organismos Empresariales de la Laguna contra la agitación, las invasiones de tierras y “la violencia en el campo” (El Siglo de Torreón, 16 de octubre de 1976, p. 8).

En síntesis, al analizar la relación entre la *insurgencia obrera nacionalista revolucionaria* protagonizada por ferrocarrileros y electricistas; se observó que la participación de las colonias integrantes del *movimiento social urbano* se expresó en el respaldo que dieron sus integrantes durante las manifestaciones en el espacio público. En estos episodios, la protesta respondió a reivindicaciones motivadas por dinámicas de alcance nacional, centradas en el mejoramiento de las condiciones laborales, salariales y la democracia sindical, por lo que con la derrota del MSF y el acuerdo al que llegaron los integrantes del STERM con el SNECRM, la protesta del sindicalismo nacionalista decayó en la región y con ello la presencia de los colonos en los actos de estos sectores obreros. En este primer momento, los movimientos —sindicalista y urbano— no establecieron instrumentos para articularse y trazar conjuntamente el curso de la movilización. De manera distinta ocurrió en el segundo momento que consistió en la interrelación del movimiento urbano con la protesta de los trabajadores de limpieza de Torreón y con los peones de Batopilas. Durante estas movilizaciones, la participación de las *colonias* fue determinante tanto para su inicio como para su desarrollo, pues no sólo respaldaron sus protestas, sino que, además, en el caso de la empresa Batopilas, les dotaron de los insumos necesarios para la subsistencia de los trabajadores durante la huelga. Asimismo, en ambos movimientos se organizaron asambleas populares, las cuales se constituyeron en instrumentos que articularon a los trabajadores y colonos, así como a otros sectores y grupos

como estudiantes, amas de casa, sacerdotes y militantes en los cuales se discutía y decidía colectivamente el curso de la protesta. Por último, hay que añadir que, tras participar en la primera etapa de la insurgencia obrera en La Laguna, el movimiento urbano vivió un periodo de expansión al pasar de dos colonias a nueve y tener presencia en cuatro ciudades de la región, lo que significó, a su vez, que su experiencia en la lucha y organización independiente del PRI aumentó. Por lo tanto, los peones de Batopilas recibieron el respaldo en el momento en que este contaba con mayor fuerza.

Conclusión

Luego del proceso armado revolucionario, la Comarca Lagunera vivió un periodo de rebelión popular en el cual se articularon reivindicaciones sindicalistas, agrarias y urbanas, si bien el movimiento consiguió generar una importante alianza que incluía a trabajadores urbanos y rurales, esta se desarticuló tras la reforma agraria cardenista de 1936, en buena medida, debido al avance de las centrales corporativas del PRI. Lo anterior implicó que entre 1940 y 1970 los trabajadores, campesinos y pobladores estuvieran controlados por las organizaciones priistas. Empero, esta situación se comenzó a transformar a comienzos de la década de 1970, cuando la Laguna, en sintonía con las circunstancias políticas nacionales, experimentó un repunte del movimiento estudiantil y sindical, a la vez que en la región tenían presencia distintas organizaciones de izquierda. Bajo estas circunstancias surgió el movimiento urbano, el cual, con el apoyo de trabajadores, militantes y estudiantes, consiguió superar el control de las organizaciones priistas y formar *colonias independientes*.

Como se observó, los militantes de Política Popular y sacerdotes del Nazas Aguanaval se integraron a estos territorios y, junto a sus pobladores, implementaron un método para su organización basado en las asambleas. Además, una vez constituidas, apoyaron a la insurgencia obrera que se desplegaba en la Laguna. En un primer momento, respaldaron las movilizaciones de los ferrocarrileros y electricistas hasta que estas concluyeron debido a la represión o al llegar a un acuerdo mediado por el gobierno, sin construir un instrumento que coordinara a trabajadores y pobladores. En un segundo momento, se observó que los integrantes del *movimiento social urbano* incidieron de manera determinante en la protesta de los trabajadores del Departamento de Limpieza de Torreón y de los peones de la hacienda vitivinícola Batopilas, la cual culminó con su expropiación para la construcción del ejido. Durante esta etapa, el movimiento urbano experimentó un momento de consolidación y expansión, asimismo, algunos de sus integrantes se convirtieron en militantes de Política Popular. La presencia de esta organización, así como de los sacerdotes del Nazas Aguanaval, permi-

tió que los peones se relacionaran con la experiencia de lucha de las *colonias independientes* y que estas brindaran su apoyo durante la huelga. Cabe señalar que durante ambas experiencias, trabajadores y colonos desarrollaron *asambleas populares y generales*, como instrumentos para decidir colectivamente el rumbo de la movilización. Por lo tanto, se observó que la relación entre el *movimiento social urbano* y la *insurgencia obrera*, si bien fue de apoyo recíproco, fue heterogénea en sus alcances, pues la participación de los colonos en la protesta obrera que estaba motivada por objetivos nacionales y políticos —democracia sindical y defensa del contrato colectivo de un sindicato nacional— decayó cuando esta terminó. Empero, movimiento urbano y obrero consiguieron una mayor articulación en el momento que los colonos incidieron de manera determinante en el desarrollo de la movilización de trabajadores y peones a nivel local propiciada por demandas laborales. Por último, hay que destacar que tal relación fue posible porque militantes de Política Popular y los sacerdotes estaban operando tanto con los trabajadores como con los colonos, lo que les permitió tejer redes y hacer de puente para su relación. Como se mostró, sacerdotes y militantes confluieron debido a su concepción sobre la capacidad de los sectores populares de tomar sus decisiones más allá de liderazgos y vanguardias, lo cual los llevó a integrarse con trabajadores, colonos y, posteriormente, campesinos. Los militantes pusieron en práctica el método asambleario que consistía en la formulación de preguntas orientadoras para que los grupos populares establecieran sus problemáticas y demandas, y con ello avanzar en su organización. Lo anterior permite destacar el peso de las organizaciones de izquierda no armadas en el proceso de articulación entre el movimiento de trabajadores y social urbano en el norte de México.

Referencias bibliográficas

- Aboites, L. (2013). *El norte entre algodones: Población, trabajo agrícola y optimismo en México, 1930-1970*. México: El Colegio de México.
- Ayala, J., Blanco, J., Cordera, R., Knochenauer, G., & Labra, A. (2008). La crisis económica: Evolución y perspectivas. En P. González & E. Florescano (Eds.), *México, hoy* (pp. 21-94). México: Siglo XXI.
- Bazdresch, C., & Levy, S. (1992). El populismo y la política económica de México, 1970-1982. En R. Dornbusch & S. Edwards (Eds.), *Macroeconomía del populismo en América Latina* (pp. 255-296). México: Fondo de Cultura Económica.
- Bennett, V., & Bracho, J. (1993). Orígenes del Movimiento Urbano Popular Mexicano: Pensamiento político y organizaciones políticas clandestinas, 1960-1980. *Revista Mexicana de Sociología*, (55), 89-102.

- Bensusan, G., & Carrillo, J. (2012). Corporaciones multinacionales y prácticas de empleo en México. En De la Garza E. (Coord.), *La situación del trabajo en México, 2012: El trabajo en la crisis* (pp. 731-769). México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa: Plaza y Valdés.
- Bizberg, Ilán. (1990). *Estado y Sindicalismo En México*. México: Colegio de México.
- Borja, J. (1974). Movimientos urbanos de las clases populares: Movimiento reivindicativo, movimiento democrático, dualidad de poder. *Papers. Revista de sociología*, (3), 39-61.
- Bracho, J. (1993). La izquierda integrada al pueblo y la solidaridad: Revisiones de Política Popular. *Revista Mexicana de Sociología*, 55(3), 69-87.
- Calva, J. L. (2019). La economía mexicana en su laberinto neoliberal. *El Trimestre Económico*, 86(343), 579-622.
- Carr, B. (1989). El Partido Comunista y la movilización agraria en La Laguna, 1920-1940: ¿una alianza obrero-campesina? *Revista Mexicana de Sociología*, 51(2), 115-149.
- _____. (1996). *La izquierda mexicana a través del siglo XX*. México: Ed. Era.
- Castells, M. (1977). *Movimientos sociales urbanos*. México: Siglo XXI.
- Cerutti, M., & Sada, E. R. (2008). La construcción de la cuenca lechera en la Laguna (1948-1975). *Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 16(31), 166-204.
- Cornelius, W. A. (1986). *Los inmigrantes pobres en la ciudad de México y la política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- De la Garza, E. (1991). Independent trade unionism in México: Past developments and future perspectives. En K. J. Middlebrook (Ed.), *Unions, Workers, and the State in Mexico*. California: University of California.
- De la Torre, J. (2006). "La iglesia diocesana de Torreón en los históricos caminos laguneros". En *Torreón. Ciudad Centenaria* (pp. 168-178). Torreón, Coahuila: Editorial La Opinión.
- Trejo R. (1978). Notas sobre la insurgencia obrera y la burocracia sindical. *Estudios Políticos*, 73-95.
- _____. (1990). "Prólogo". En Trejo R. (ed.), *Batir el tambor del alba. Textos de Rafael Galván* (pp.15-39). México: El Nacional, 1990.
- Escobar, S. (2021). *El camino obrero. Historia del sindicalismo mexicano, 1907-2017*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Fuentes, R. (2020). *Procesos de formación política en la militancia maoísta en México. El caso de Política Popular (1968-1979)*. [Tesis de Maestría en Investigación Educativa]. Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
- Esterbauer, C. (2013). De la Línea Proletaria a una identidad competitiva: Los siderúrgicos en México. El caso de la sección 147. *El Cotidiano*, (182), 7-16.

- Galindo, M. (1977). El movimiento obrero en el sexenio echeverrista. *Investigación Económica*, 36(142), 97-127.
- García, R. (1988). *Deterioro ambiental y pobreza en la abundancia productiva. El caso de la Comarca Lagunera*. México: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N-International Federation of Institutes for Advanced Study.
- Garza Toledo, E. de la. (1988). *Ascenso y crisis del estado social autoritario: Estado y acumulación del capital en México, 1940-1976*. México: El Colegio de México.
- Gómez, S., & Miquet, M. (1976). Integración o democracia sindical: El caso de los electricistas. En *Tres estudios sobre el movimiento obrero en México* (pp. 151-202). México: El Colegio de México.
- González, E., & Aspe, P. (1979). Empresarios y obreros. Dos grupos de poder frente a la crisis y la política económica de los sesenta. *Investigación Económica*, 38(150), 289-319.
- Harvey, D. (2013). *Ciudades rebeldes: Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. México: Ediciones Akal.
- Hellman, J. A. (1994). Mexican Popular Movements, Clientelism, and the Process of Democratization. *Latin American Perspectives*, 21(2), 124-142. JSTOR.
- Hernández, Begoña. (2011). Demetrio Vallejo Martínez, el líder ferrocarrilero. En *Antropología. Revista interdisciplinaria del INAH*, (N.º 92), 47-60.
- Hernández, Rogelio (2020). La persistencia de una idea: el nacionalismo revolucionario. Del PRI a López Obrador. *Foro internacional LX*, (2), 501-36.
- Hernández, S. (2013). *El movimiento urbano popular en La Laguna 1970-1980*. Torreón: Gobierno de Coahuila.
- Iñigo, N. (2008). Algunos instrumentos para el análisis de las luchas populares en la llamada historia reciente. En López, N. et al *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (pp. 77-94). Buenos Aires: CLACSO.
- Kaye, H. J. (1989). *Los historiadores marxistas británicos un análisis introductorio*. España: Universidad de Zaragoza.
- Lawrence Haber, P. (2006). *Power from experience: Urban popular movements in late twentieth-century Mexico*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Martínez Saldaña, T. (1980). *El costo social de un éxito político. La política expansionista del Estado mexicano en el agro lagunero*. México: Colegio de Postgraduados.
- Melgoza, J., & De la Garza, E. (1996). Los ciclos del movimiento obrero mexicano en el siglo xx. *Revista Latinoamericana de Estudios Del Trabajo*, (2), 127-162.
- Méndez, L, y Quiroz, J. (1994). *Modernización estatal y respuesta obrera: historia de una derrota*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades.

- Mendoza, G. E. (2015). La insurgencia obrera y el fin del Estado de la Revolución. El caso de Uranio Mexicano (uramex) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (sutin). *El Cotidiano*, (191), 109-119.
- Middlebrook, K. J. (1989). The Sounds of Silence: Organised Labour's Response to Economic Crisis in Mexico. *Journal of Latin American Studies*, 21(2), 195-220.
- Moreno Galván, F. de J. (2013). *El movimiento urbano popular en el Valle de México*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Navarro, Adlaí. (2016). *La teología de la liberación y su contexto histórico*. México: Ediciones Navarra.
- Navarro, B., & Ramírez Sáiz, J. M. (1985). Estado y movimiento urbano popular en México. *Estudios Políticos*, 4(4-1), 58-63.
- Necochea, G. (2022). De lo justo y la injusticia en las huelgas de la Insurgencia obrera en México, 1965-1983. En V. B. Vargas & M. Mastrángelo (Eds.), *La izquierda en movimiento* (pp. 213-238). Buenos Aires: CLACSO.
- _____, & de los Ríos, A. (2021). Violencia política y movilización popular: Chihuahua (México), 1972. *Historia Caribe*, 16(39), Article 39.
- _____. (2019). Huelga y solidaridad en el pueblo minero de Santa Bárbara. *Signos históricos*, 21(41), 230-258.
- Novelo, V. (1989). *Democracia y sindicatos*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- Núñez González, O. (1990). *Innovaciones democrático culturales del Movimiento Urbano Popular ¿Hacia nuevas culturas locales?* México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
- Ortiz G., & Morales O., (1991) *El sindicalismo independiente en México 1970-1976*. [Tesis de Licenciatura en Sociología]. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Parker, M. (2010). Industria. En *Comarca lagunera: Procesos regionales en el contexto global*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía.
- Pérez, F. (1990). The enduring union struggle for legality and democracy. En J. Foweraker & A. Craig (Eds.), *Popular movements and political change in Mexico* (pp. 105-120). California: Lynne Rienner Publishers.
- Pradilla, E. (1987). *Capital, estado y vivienda en América Latina*. México: Distribuciones Fontamara.
- Puma, J. (2014). *Populismo maoísta: Un sendero que no condujo a la lucha armada. 1968-1979* [Tesis de Maestría en Historia Internacional y Comparada]. Centro de Investigación y Docencia Económicas.
- _____. (2021). *La historia transnacional de Política Popular una organización maoísta mexicana: Las colonias populares como bases de apoyo para la revolución*. Centro de Es-

tudios China México-Universidad Nacional Autónoma de México. https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20220119_CECHIMEX_La_historia_transnacional_de_Politica_Popular_una_organizacion_maoista_Juan_Puma.pdf

- _____. (2022). The Nazas-Aguanaval Group: Radical Priests, Catholic Networks, and Maoist Politics in Northern Mexico. En *The Americas* 79 (N.º 2), 291-320. <https://doi.org/10.1017/tam.2021.141>
- Ramírez, J. (1986). *El movimiento urbano popular en México*. México: Siglo XXI.
- Ramírez, J. (1994). Aportaciones políticas del Movimiento Urbano Popular. *Revista Mexicana de Sociología*, 56(3), 89-112.
- Ramos Salas, J. (2019). *Entre el esplendor y el ocaso lagunero. Ensayo sobre el desarrollo urbano de Torreón*. Torreón, Coahuila: Archivo Municipal de Torreón.
- Riera Fullana, J. (2016). *Ejido Colectivo Batopilas su historia*. México: Creática editorial.
- Rivas Sada, E. (2013). Competitividad de la Comarca Lagunera (1920-1960) Productividad, calidad y desempeño en los mercados. En *Algodón en el norte de México (1920-1970): Impactos regionales de un cultivo estratégico*, pp. 73-138. México: El Colegio de la Frontera Norte.
- Roxborough, I., & Zapata, F. (1983). El sindicalismo en el sector automotriz. *Estudios Sociológicos de El Colegio de México*, 1(1), Article 1.
- Sánchez, A. (2020). *La revolución de nuestras conciencias. Una historia de lucha estudiantil y popular: 1972*. [Inédito]
- Sánchez, A. «Delimitación geográfica». En *Comarca lagunera: procesos regionales en el contexto global*, editado por Álvaro López López y Álvaro Sánchez Crispín (pp. 15-36). México: UNAM, Instituto de Geografía, 2010.
- Sevilla, A. (1998). *Flor de asfalto: Las expresiones culturales del Movimiento Urbano Popular*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Soldatenko, M. (2018). Enrique Ochoa, y Jaime Pensado, eds. «The Various Lives of Mexican Maoism: Política Popular, a Mexican Social Maoist Praxis». En Ochoa E y Pensado J (coords.), *México beyond 1968: Revolutionaries, Radicals, and Repression during the Global Sixties and Subversive Seventies* (pp. 175-94). Tucson: The University of Arizona Press.
- Solís, M. C. (1976). Control sobre el movimiento obrero en México. *Foro Internacional*, 496-525.
- Soto, J. (2022). “!El Lote es de quien lo habita!” *Formación y politización del Movimiento Urbano Popular en la Comarca Lagunera: 1972-1974* [Tesis de Licenciatura en Historia]. Escuela Nacional de Antropología e Historia.
- Tagle, S. G. (1980). *Insurgencia y democracia en los sindicatos electricistas*. México: Colegio de México.
- Thompson, E. P. (1995). La economía «moral» de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII. En *Costumbres en común* (pp. 364-433). España: Crítica.

- Trejo, Q. (2004). Clase, formación histórica y desarticulación empresarial: Los obreros de la industria automotriz, 1969-1982. *Sociológica*, 19(55), 79-111.
- Trejo, R. (1987). *¡Este puño sí se ve! insurgencia y movimiento obrero*. México, D.F: Ediciones El Caballito.
- Tse-tung M. (1976) “Algunas cuestiones sobre los métodos de dirección”. En *Obras escogidas de Mao Tse Tung. Tomo III* (pp.117-123). Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras.
- Vargas-Lobsinger, M. (1999). *La Comarca Lagunera: De la revolución a la expropiación de las haciendas, 1910-1940*. México: Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.
- Yanuel, R y Puma, J. (2023). “Queremos que el pueblo haga su política y nosotros hacerla con él. Una historia de la organización maoísta Política Popular (1968-1979)”. En Reynoso, I. y Velázquez, U. *Senderos de lucha: las izquierdas mexicanas durante la época de la Guerra Fría* (pp. 665-706). México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2023.
- Zapata, F. (ed.) *¿Flexibles y productivos? estudios sobre flexibilidad laboral en México*. México, D.F: El Colegio de México.

Hemerográfico

El Siglo de Torreón

Diario La Opinión

Archivo

Archivo Municipal de Torreón, Seguridad Pública.

Archivo Municipal de Torreón, Obras públicas.

Archivo General de la Nación, Secretaría de Gobernación, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales

Archivo General de la Nación, Secretaría de Gobernación, Dirección Federal de Seguridad, caja 370/4223, exp. 15-3, leg. 18, ff. 230-231

Entrevistas

Entrevista Alfredo Muñoz. 2021. Elaboración propia

Entrevista Augusto Sánchez. 2021. Elaboración propia

Entrevista Armando Sánchez de la O. 2021. Elaboración Propia

Entrevista Benigno Martínez. 2021. Elaboración Propia

Entrevista Guillermo Muñoz. 2020. Elaboración propia

Entrevista Isauro Torres. 2021. Elaboración propia

Entrevista Gabriel García. 2021. Elaboración propia

Entrevista Venancio Chairez. 2021. Elaboración propia